



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Acción Popular
DEMANDANTE	Bernardo Abel Hoyos Martínez
DEMANDADOS	BBI Colombia S.A.S y otros
DECISIÓN	Confirma sentencia
RADICADO	05001 31 03 008 2018 00525 01

Medellín, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida el 24 de julio de 2023 por el Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

1. DEMANDA: Bernardo Abel Hoyos Martínez promovió acción popular frente a la sociedad BBI Colombia S.A.S., en la cual invocó la protección de los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad, por cuanto el establecimiento de comercio de propiedad de la demandada, ubicado en la calle 29 No. 46-49 de Medellín, no cuenta con rampa de acceso para las personas con movilidad reducida, lo cual constituye una inobservancia de los derechos colectivos previstos en los literales g, m y n del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

2. TRÁMITE: El Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín avocó conocimiento del asunto y dispuso la notificación a la sociedad demandada, las comunicaciones respectivas a la Alcaldía de Medellín -Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial-, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y la publicación del aviso de prensa destinado a enterar del trámite a los miembros de la comunidad.

2.1. Notificada la sociedad demandada mediante correo electrónico, contestó la demanda y a título de "excepciones" formuló las siguientes: *"no existe claridad en el derecho colectivo vulnerado – no vulneración ni amenaza de los derechos colectivos enunciados"* y *"falta de legitimación en la causa por pasiva"*. De igual modo, pidió vincular a la copropiedad Centro Integral de Servicios Punto Clave P.H. y a la sociedad Arrendamientos Londoño Gómez S.A.

2.2. En virtud de lo anterior, el despacho ordenó la vinculación de las sociedades en comentario.

2.3. Centro Integral Servicios Punto Clave P.H. allegó escrito de contestación en que propuso como excepciones *"carencia actual de objeto"*, *"ausencia de derechos colectivos vulnerados por la copropiedad"*, *"cumplimiento de la normativa vigente por parte del centro comercial"*, *"falta de legitimación en la causa por pasiva"*, *"carencia de soporte legal para conceder el incentivo económico del actor popular"* y *"la genérica"*.

3. AUDIENCIA DE PACTO CUMPLIMIENTO:

3.1. Integrado el contradictorio, el *a quo* fijó fecha para audiencia de pacto de cumplimiento que se llevó a cabo el 13 de junio de la misma anualidad y en la misma, a manera de pacto, se concedió a la accionada el término de seis (6) meses, con el fin de gestionar lo pertinente para adecuar el andén de manera tal, que permitiera la locomoción de las personas con movilidad reducida, esto es, andén a nivel, sin rampa y sin barandilla, el cual quedará de 8 metros de largo por 1.50 metros de ancho; en cumplimiento de la normatividad técnica.

3.2. El 22 de junio de 2023 las sociedades demandadas presentaron escrito de propuesta de pacto de cumplimiento, en que plantearon adecuar la entrada al local con una extensión del andén a nivel existente desde el local 3 al local 1, sin necesidad de la construcción de rampa. La sociedad Londoño Gómez S.A.S. se encargaría de contratar al personal que haría la obra civil y de coordinar la misma, así como asumir el 100% del valor que incluyera pago de materiales, trabajadores y demás. Las sociedades demandadas se comprometieron a prestar la colaboración necesaria para el cabal desarrollo de la obra, permitir el acceso de los contratistas, la construcción en sí, la suscripción de

documentos para la obtención de permisos y licencias y otras, siempre que no fueran las correspondientes a la compañía Londoño Gómez S.A.S. en la condición de propietaria del inmueble. En virtud de que la obra requiere la obtención de licencias y permisos, para lo cual solicitaron un plazo no inferior a 6 meses. Precisaron que no se colocaría barandillas, ni se pondría cintas o puntos antideslizantes, debido a que, no se construiría rampa, sino que se haría una extensión del andén. Finalmente, pidieron que no se impusiera condena en costas.

4. SENTENCIA: Mediante providencia de 24 de julio de 2023, el Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín aprobó el pacto de cumplimiento logrado en el trámite y requirió a las accionadas para que se abstuvieran de incurrir de nuevo en conductas como las que originaron la demanda, además negó la condena en costas. Como fundamento de lo anterior, tuvo en consideración que la descripción de las obras a efectuar presentada por las partes en memorial de 22 de junio de 2023 se compadece o concuerda con lo acordado en el pacto de cumplimiento de 13 de junio de la misma anualidad; que en todo caso exige que en la construcción o adecuación del andén se cumpla con las normas técnicas que garanticen el acceso seguro de las personas con movilidad reducida.

Frente al porcentaje en que las accionadas deben asumir el costo de la construcción y los permisos correspondientes, determinó que era de resorte exclusivo de las partes, tal y como se convino desde la audiencia de pacto de cumplimiento. En relación con los demás aspectos como lo concerniente a la tramitación de las licencias pertinentes y el tiempo estimado de 6 meses para la construcción de la obra, fue algo que se pactó y así se conservaría pues inclusive, fue ratificado en el escrito de 22 de junio de 2023.

Por último, el despacho se abstuvo de imponer el pago de costas procesales, porque de conformidad con el precedente del Consejo de Estado en esta materia, en los eventos en que la acción popular finaliza con un pacto de cumplimiento y este es aprobado mediante sentencia, al no existir parte vencida no habrá condena en costas.

5. APELACIÓN: Inconforme con lo decidido el accionante interpuso recurso de apelación, con el objetivo de que el fallo fuera revocado y en su lugar se condenara en costas a la parte accionada. Como fundamento, trajo a colación el precedente del Consejo de Estado Sentencia de Unificación 6 de agosto de 2019 Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01 relativa a la procedencia de la condena en costas a favor del demandante que saca adelante las pretensiones.

6. ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

6.1. La parte accionante calificó de incongruente la sentencia e insistió en que debía tenerse en cuenta los criterios determinados por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de agosto de 2019 Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01. Además, pidió se programara audiencia de alegatos y fallo.

6.2 La representante legal de Arrendamientos Londoño Gómez solicitó que el recurso de apelación se desestimara y se confirmara la sentencia. Con ese propósito, sostuvo que en el recurso incoado no era posible determinar cuáles eran los fundamentos fácticos y jurídicos de la inconformidad. Anotó que el demandante pidió aplicar los criterios determinados en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, empero no expuso cuáles eran esos criterios.

6.3. La representante legal del Centro Integral de Servicios Punto Clave P.H. pidió se confirmara la decisión y en ese sentido no se condenara a la parte accionada al pago de las costas, en atención a que la Ley 1425 de 2010 derogó el incentivo económico para el accionante popular, en razón a que dicho estímulo económico podía propiciar abusos en el ejercicio de la acción popular y en este caso en particular, las demandadas trabajaron de buena fe en la construcción de un pacto de cumplimiento conjunto para solucionar la problemática planteada, lo cual fue aprobado por el juez de primera instancia.

6.4. La apoderada judicial de BBI Colombia S.A.S. pretendió se confirmara la sentencia impugnada, con fundamento en que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la condena en costas a favor de la parte ganadora procede en los eventos en que haya una parte vencida en el proceso y que, tratándose

de las acciones populares, hay eventos en que el proceso termina sin que haya parte ganadora y vencida, como ocurre en los casos de la carencia actual de objeto por hecho superado y cuando finalice con pacto de cumplimiento.

Al respecto arguyó que, en este caso en concreto el procedimiento terminó con un pacto de cumplimiento, en que la parte accionada reconoció de forma espontánea la necesidad de ajustar la conducta para garantizar el servicio accesible en sus instalaciones, tramitó lo necesario para la intervención y acordó el plazo para la finalización que no solo requería de una obra civil, sino además de la aprobación de licencias y uso de espacio público y demás expuestas, así que en tales condiciones no se podía hablar de parte vencida.

CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO.

En atención al recurso interpuesto, a la Sala le corresponde decidir si el juez de primer nivel tuvo razón al abstenerse de condenar en costas a la parte demandada, con base en que el trámite de la acción popular finalizó con la aprobación del pacto de cumplimiento.

2. MARCO JURÍDICO DE LA DECISIÓN Y CASO EN CONCRETO.

2.1. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en cuanto a las costas establece que el juez aplicará las normas de procedimiento civil y como regla especial señala que solo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados a la parte accionada, en los eventos en que la demanda haya sido presentada en forma temeraria o de mala fe. Mientras que, por su parte, el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P. prevé como regla general que la condena en costas se impone a la parte vencida en el proceso.

El doctrinante Hernando Devis Echandía en la obra *"Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. Teoría General del Proceso. Tercera Edición"*, explicó que las costas procesales comprenden aquellos gastos que las partes deben asumir para atender el proceso, incluyen las expensas y honorarios equitativos del propio apoderado y el de la parte contraria; así mismo, señala que la parte

vencida en el proceso, o la que pierda el trámite incidental o el recurso de apelación o revisión que haya propuesto, será condenada al pago por tal concepto en favor de la contraparte.

Por otro lado, la Corte Constitucional en Sentencia C-539 de 1999 analizó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y definió las costas procesales como *"aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.), y; de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, los cuales -vale la pena precisarlo- se decretan a favor de la parte y no de su representante judicial"*. De igual modo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto AC2900 de 2017 determinó que las costas procesales constituyen *"la erogación económica que debe realizar la parte vencida en un proceso judicial y comprende, tanto los gastos comprobados causados en su trámite, como las agencias en derecho, correspondientes a los egresos económicos efectuados por la parte triunfadora para su defensa judicial"*.

De igual modo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto AC2900 de 2017 determinó que las costas procesales constituyen *"la erogación económica que debe realizar la parte vencida en un proceso judicial y comprende, tanto los gastos comprobados causados en su trámite, como las agencias en derecho, correspondientes a los egresos económicos efectuados por la parte triunfadora para su defensa judicial"*.

2.2. El Consejo de Estado en Sentencia de 6 de diciembre de 2012 Rad. 73001-23-31-000-2010-00718-01(AP) señaló:

"En el caso sub examine la Sala considera que no hay lugar a condenar en costas a las entidades demandadas por los gastos en que incurrió la demandante durante el proceso, pues como lo definió en oportunidad

precedente ésta Sección¹, cuando una acción popular termina con un pacto de cumplimiento, donde se señalaron fórmulas de arreglo, y este es aprobado mediante sentencia, no existe parte vencida, y por lo tanto, no es procedente la condena en costas, atendiendo las normas citadas del Código de Procedimiento Civil.”

Ese recuento jurisprudencial y normativo permite concluir que el juez deberá condenar en costas a la parte vencida en el trámite, a favor de la contra parte que ganó, decisión que inclusive se debe tomar de oficio, porque, como la Sala Civil de la Corte Suprema precisó en auto de 10 de septiembre de 1990, las costas no constituyen un tema del litigio, sino una consecuencia del mismo. No tienen origen sustancial sino procesal, por cuanto, *"esas decisiones son más una consecuencia de las resoluciones que se tomen en cuanto hace a esos derechos, de donde ellas deben seguir la suerte de lo principal"* (CSJ. SC de 10 de septiembre de 2001 Rad. 5542, citada en Auto AC4838 de 2014). Por esto se infiere además que, si la parte demandada resultó vencida, es imperiosa la condena en costas, sin que sea del caso analizar situación diferente a la prosperidad de la acción, como por ejemplo la conducta del accionado.

3. En el caso en concreto, la Sala encuentra que, en lo que tiene que ver con la negativa de condenar en costas a la parte demandada, la decisión de primera instancia debe ser confirmada, por las razones que a continuación se expone:

El recurrente insistió en que la providencia impugnada carecía de congruencia, en tanto, el despacho de primer nivel no tuvo en consideración la normatividad aplicable frente al tema de la condena en costas e insistió en que se debía aplicar lo señalado en la Sentencia de Unificación de agosto de 2019 Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01 en la cual se habla sobre la procedencia de la condena en costas a favor del accionante que logra sacar adelante las pretensiones, en cuyo caso se aplica la regulación prevista sobre el tema en el código general del proceso. No obstante, la Sala advierte que al recurrente no le asiste razón, debido a que, la decisión invocada remite a normas como los artículos 361 y 366 de la codificación citada que, al establecer los criterios para la liquidación de costas y agencias en derecho, indican que estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, que tendrán que aplicarse las tarifas que prevea el Consejo Superior de la Judicatura, y que deberá tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión desplegada. Esto, a favor de quien resulte vencedor en el proceso; pero lo

¹ Sentencia de 11 de mayo de 2006. Rad. 25000-23-27-000-2004-02302-01(AP)

cierto es que, conforme al precedente del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, en los eventos en que el trámite de la acción popular culmine con sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento, no habrá lugar a la condena en costas, en razón a que no existe parte vencida y por lo tanto no procede la condena en mención.

En este sentido, se observa que el 25 de octubre de 2018 Bernardo Abel Hoyos Martínez presentó acción popular frente a la sociedad BBI Colombia S.A.S., demanda que fue admitida el 13 de noviembre de 2018 y notificada a la compañía en mención el 7 de julio de 2022. En proveído de 10 de octubre de 2022, el despacho de primera instancia ordena la vinculación de Centro Integral Servicios Punto Clave P.H. y Arrendamientos Londoño Gómez S.A., quienes fueron notificados mediante correos electrónicos de 25 de enero de 2023. El 5 de mayo de 2023 el fallador de primer nivel fijó fecha de audiencia de pacto de cumplimiento para el 13 de junio de 2023 a las 09:00 am, oportunidad en que las partes llegaron al acuerdo en que a manera de pacto, la parte accionada se comprometió a que en el término de seis (6) meses haría todas las gestiones pertinentes y llevaría a cabo la adecuación del andén, de manera tal, que permitiera la locomoción de las personas con movilidad reducida; esto es, andén a nivel, sin rampa y sin barandilla, el cual quedaría de 8 metros de largo y 1.50 metros de ancho; obra que se haría con cumplimiento de toda la normatividad técnica y legal.

Así que, en sentencia de 24 de junio de 2023, el Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín aprobó dicho pacto de cumplimiento logrado en el trámite de la acción popular instaurada por Bernardo Abel Hoyos Martínez frente a BBI Colombia S.A.S., al cual fueron vinculadas las sociedades Centro Integral de Servicios Punto Clave y Londoño Gómez S.A.S., en los términos acordados. También requirió a las accionadas para que se abstuvieran de incurrir nuevamente en conductas como las que originaron la demanda y, no condenó en costas a la parte demandada. Frente a tal decisión, el demandante popular apeló y alegó que la sentencia era incongruente porque la condena en costas era procedente.

La síntesis expuesta pone de presente que, en el caso bajo examen el extremo procesal demandado reconoció la necesidad de ajustar su conducta en el

establecimiento de comercio ubicado en la calle 29 No. 46-49, para garantizar la locomoción de las personas con movilidad reducida, y se comprometió a ejecutar las obras respectivas, previa obtención de los permisos y licencias pertinentes. En tales condiciones, al tenor de lo explicado por la colegiatura superior de la jurisdicción contencioso administrativa, no pude hablarse, al tenor de lo señalado en el aparte de la sentencia anteriormente citada que, en el caso de la ocurrencia del pacto, exista una parte vencedora y una parte vencida, desdibujándose de tal manera, los presupuestos para determinar la procedencia de la condena en costas.

En decisiones pretéritas esta sala llegó a imponer dicha condena al estimar que gracias a la gestión del demandante popular se corrigió la afectación de derechos colectivos; pero el criterio superior adoptado en el sentido de negar dicha condena en casos como el presente, obliga a concluir que la sentencia proferida el 24 de julio de 2023 se ajusta a la normativa que regula el trámite de la acción popular y al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que ha definido que en los eventos en que el trámite de la acción popular finalice con la aprobación del pacto de cumplimiento, no habrá lugar a la condena en costas, puesto que, no hay una parte vencida a la cual deba imponérsele dicha sanción.

En consecuencia, la sentencia proferida por el Juzgado 008 Civil del Circuito de Medellín será confirmada.

DECISIÓN

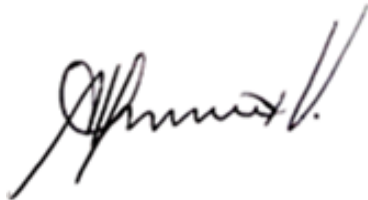
Por lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada.

SEGUNDO: Sin condena en costas porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE.

Los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN